

RUC: 2200376389-0

RIT: 506-2023

Receptación de vehículo motorizado.

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes.

Que, ante la sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por la juez doña **CLAUDIA GALAN VILLEGAS** e integrada por los jueces **FRANCISCO VELA GONZALEZ y EDUARDO GALLARDO FRIAS**, el día diecinueve de enero del año en curso se verificó el juicio oral seguido contra el siguiente acusado:

GABRIEL ARMANDO LEÓN MUÑOZ, cédula nacional de identidad N° 20.602.568-9, chileno, nacido el 30 de noviembre de 2000, 23 años, soltero, feriante, con domicilio en Pasaje PANITAO N° 1380, comuna de Estación Central,.

En representación de Ministerio Público compareció el fiscal **Christofer Belda Carrasco**, en tanto por el imputado lo hizo el defensor penal público **Gustavo Valenzuela Rojas**

SEGUNDO: La acusación formulada por el Ministerio Público fue la siguiente:

1.- HECHOS.

"El día 19 de abril de 2022, a las 9:10 horas aproximadamente en la vía pública, intersección de las calles Mailef con Quenuir en la comuna Estación Central, el imputado GABRIEL ARMANDO LEÓN MUÑOZ fue sorprendido manteniendo en su poder el vehículo PPU BYHS-50, que mantenía encargo vigente por Robo de fecha 17 de abril de 2022, encargo SEBV. 202204-4951, según parte de denuncia n° 2140 de fecha 17 de abril de 2022 de la 21ª Comisaría de Estación Central. El imputado conocía o no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo, toda vez que no mantenía ningún documento que acreditara su legítima adquisición ni lo recibió de su legítimo tenedor".

2.- CALIFICACIÓN JURÍDICA, GRADO DE DESARROLLO DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN.

A juicio de la Fiscalía los hechos son constitutivos de los delitos de Receptación de vehículo motorizado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, delito que se encuentra en grado de desarrollo Consumado.

3.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

No concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

4.- PENA REQUERIDA.

Solicita el Ministerio Público se imponga al acusado GABRIEL ARMANDO LEÓN MUÑOZ, una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias del artículo 29 del Código Penal, multa de 10 UTM.

Asimismo, se solicita las costas del caso, según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Penal.

TERCERO: Alegatos de apertura.

La **fiscalía** sostuvo que se acreditará con la prueba los hechos materia de la acusación y la participación en ellos del acusado, más allá de toda duda razonable.

La **defensa** señaló que el acusado colaborará con el esclarecimiento de los hechos.

CUARTO: Declaración del acusado.

El acusado indicó que -el día de los hechos materia de la acusación- un amigo llegó a su casa y le pidió si le podía cuidar el auto, salió a comprar en él, pero nunca pensó que era robado. El auto era plomo. Carabineros no lo sorprende adentro del vehículo, él estaba comprando unas verduras en una casa esquina. Lo llevaron detenido por sus antecedentes, les dijo por miedo les dijo que no sabía de quien era el auto. El auto quedó tirado ahí, las llaves del auto estaban puestas. El amigo que le pasó el auto desapareció, está bien escondido. Lo conoce hace rato, se llama Javier. Le pasó el vehículo en su casa.

QUINTO: Alegatos de clausura.

El **fiscal** sostuvo que se acreditaron los hechos materia de la acusación, tanto en lo referido a la participación del acusado como con relación al delito base. La versión del acusado en el sentido que no tenía como saber que auto era robado no es verosímil.

La **defensa** a su turno manifestó que el acusado colaboró, en cierta medida reconoce los hechos, aunque ha pasado tiempo desde los mismos por lo que no recuerda algunos detalles.

SEXTO: Cuestiones fácticas a probar y su relación con los tipos penales.

En relación con el caso *sub lite* el hecho contenido en la acusación supone establecer los presupuestos fácticos y normativos del delito de receptación de vehículo motorizado. En sede de tipicidad objetiva, es condición *sine qua non* que el sujeto activo del delito **tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas o robadas, en el caso que nos convoca, el vehículo singularizado en la acusación.** Luego, es menester que concurren coetáneamente dos elementos adicionales: **primero;** un elemento también objetivo, consistente en la existencia del delito base, es decir, que el objeto material en que recae la acción de emprendimiento provenga de un delito cuyo perpetrador sea distinto al sujeto activo de la receptación y; **segundo,** el elemento subjetivo, consistente en que el sujeto activo del delito conozca o no pueda menos que conocer tal circunstancia.

El deber de acreditación más allá de toda duda razonable de la hipótesis imputativa por parte del acusador debe verificarse precisamente en relación con los elementos fácticos concretos contenidos en la acusación, los cuales están indisolublemente conectados con las premisas fácticas referidas a la temporalidad, conductas específicas, espacio y contexto de la imputación. Luego, esas premisas fácticas deben ser susceptibles de subsumirse en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal conforme al mandato de taxatividad consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso final de

la Constitución Política de la República. Es decir, la actividad probatoria de la parte acusadora debe inequívocamente dirigirse a la corroboración del núcleo fáctico de la acusación, transcrito literalmente en el motivo segundo de esta sentencia. Lo que se viene explicando es lo que permite satisfacer la irreductible exigencia del artículo 342 del Código Procesal Penal en orden a que la sentencia, en caso de ser condenatoria, establezca con claridad los hechos que se dan por probados en el juicio y que sirven de base a una condena, vinculando tales hechos con los medios de prueba que sirvieron para acreditarlos. Y ello, aunque resulte evidente, es lo que orienta, delimita, condiciona y determina la actividad probatoria de la hipótesis acusatoria y el subsecuente control epistémico que de dicha actividad deben realizar los adjudicadores en la esfera de la valoración probatoria.

SEPTIMO: Análisis de la prueba de cargo y descargo, declaración del acusado y justificación de decisión condenatoria.

Tal como se adelantó en el veredicto de fecha diecinueve de enero del año en curso, por unanimidad este Tribunal, consideró que la **prueba rendida por el Ministerio Público resultó suficiente para condenar por el delito materia de la acusación al acusado Gabriel Armando León Muñoz.**

En el contexto descrito y para efectos metodológicos, es relevante dar cuenta de algunas cuestiones pacíficas o no controvertidas. Ello, con la finalidad de acotar la controversia sometida a consideración del tribunal, lo cual no implica dispensar a estos jueces del deber de motivación;

proposiciones fácticas que se derivan, además, de la prueba rendida en el juicio y que a continuación someramente se valora y asocia a dicha premisas:

1.- En primer término, quedó meridianamente establecido en el juicio que el día 19 de abril de 2022, a las 9:10 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Mailef con Quenuir en la comuna Estación Central, el imputado GABRIEL ARMANDO LEÓN MUÑOZ fue sorprendido manteniendo en su poder el vehículo, Chevrolet Gris, placa patente única BYHS-50,

Ello, quedó corroborado con los **dichos coincidentes en este punto en juicio del propio acusado** y con la declaración de la carabinera **Lorena Soto González**, quien -con relación a los hechos de la acusación- explicó que ese día como a las 9:00 horas en calle Mailef con Quenuir en Estación Central realizaba labores de patrullaje. En ese contexto, vieron junto a sus colegas un vehículo gris Chevrolet y controlaron al sujeto que estaba en el asiento del conductor. Al consultar a CENCO el número de la patente, éste tenía encargo por robo. El sujeto les dijo que el auto era de otra persona de la casa esquina. El vehículo no se podía trasladar, tuvieron que solicitar una grúa para trasladarlo. Al refrescarle la memoria el fiscal a la testigo, esta señaló que la placa patente era BYHS-50, que fue la que permitió determinar la existencia del encargo por robo.

La premisa fáctica en comento fue también corroborada con la declaración del funcionario **José Linares Villalobos**, que el 19 de abril de 2022 le hizo un peritaje a un automóvil Chevrolet Optra plateado, placa patente BYHS-50. Tenía -dijo- daños en ambas puertas del costado derecho y parachoques trasero. Ni la chapa de apertura del vehículo ni el encendido

de motor tenían señales de fuerza. Al consultar el número de la placa patente a CENCO, corroboró que tenía encargo por robo. En igual sentido, y a propósito del **objeto material del delito materia** de la acusación, las afirmaciones de ambos funcionarios policiales quedaron asentadas con la incorporación del set fotográfico de otros medios de prueba numero 2 del auto de apertura (fotos 1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15); las cuales, en síntesis, dan cuenta del vehículo examinado, sus características, color, marca y número de placa patente, motor y chasis. Adicionalmente, las fotografías referidas permitieron corroborar los daños descritos por el perito y las llaves del automóvil.

2.- Adicionalmente, la circunstancia de que el vehículo tenía un encargo por robo no sólo se estableció con las declaración de los funcionarios policiales mencionados en el apartado anterior a CENCO corroborando ese antecedente, sino, además, con la prueba documental, consistentes en el certificado de Registro de Vehículos motorizados del automóvil PPU BYHS.50, inscrito a nombre de Javiera Acevedo Salas y que, al final, consigna el encargo por robo de 17 de abril de 2022; y, la copia Informe vigente N° SERV 202204 4951, del 17 de abril del 2022, con fecha y hora del delito de robo en los términos declarados por la propia víctima en el juicio, doña Marcela Salas Banda.

3.- Igualmente, la existencia del delito base que originó el encargo por robo antes aludido, quedó establecida ni más ni menos con la declaración de la **víctima de dicho delito, Marcela Salas Banda**, quien pormenorizadamente explicó

que en abril de 2022, un domingo de pascua de resurrección, le robaron su vehículo, cerca de las 9 de la mañana. Se estaban estacionando en calle las Catalpas frente a una parroquia, llegaron dos hombres de 40 o más años, uno la abordó por la puerta donde conducía ella y el otro por el lado de su pareja. Le golpeó a ella el vidrio con el puño un sujeto y le dijo "bájate del auto conchetumadre y entrégame las llaves". Su pareja es ciega explicó, ella abrió la puerta y trató de dialogar con el asaltante. Le entregó las llaves y se dio cuenta que su pareja había empujado a otro sujeto y lo botó al suelo, quedó de rodillas y al verlo se dio cuenta que tenía un revolver en las manos y los estaba apuntando. Finalmente, se llevaron el auto los asaltantes. Era un Chevrolet Optra, gris. El auto era de su hija. La patente era BYHS-50. Llamaron a Carabineros y como al día subsiguiente les avisaron que el vehículo se había recuperado por lo que lo fueron a retirar, lo que debió hacerse con una grúa ya que el vehículo estaba dañado (situación inexistente al momento del robo en que se encontraba en buenas condiciones, sin abolladuras ni otros daños). Además, la testigo identificó el vehículo al exhibírsele la foto 1 de otros otros medios de prueba numero uno donde divisa el vehículo que le robaron, con el capote abierto, chocado y neumático delantero reventado.

4.- Por último, (y aun cuando no fuera del todo relevante en la conformación de la decisión del tribunal), disputado que el acusado carecía de licencia de conducir según el mismo declaró, lo que quedó externamente corroborado con la Hoja de Vida del Conductor de Gabriel Armando León Muñoz, en la cual no consigna licencias registradas.

Ninguno de los hechos referidos han sido disputados por la defensa. Se trata en definitiva del establecimiento de todos los elementos objetivos del tipo penal atribuido.

En consecuencia, lo único de lo que ha debido hacerse cargo el tribunal guarda relación con la circunstancia de si acaso el acusado no podía menos que conocer el origen del vehículo en cuyo poder fue detenido por parte de los funcionarios policiales (elemento subjetivo de la receptación). **Es relevante decir que ello no fue planteado por la defensa, sino más bien por la breve declaración del acusado en la que refirió que no sabía ni imagino que el automóvil era robado.** Sólo se ha controvertido el elemento subjetivo, es decir, el dolo.

Establecido lo anterior, **es pertinente referirse a la declaración del acusado.** En primer término, la declaración del acusado, si bien resultó relevante en relación con los elementos objetivos del tipo penal al haber éste reconocido el porte del vehículo y las circunstancias de su detención, su explicación o justificación no fue ni remotamente acreditada en el juicio. No se aportó ningún antecedente de que pueda configurarse alguna **duda razonable** referida al dolo del acusado, pues dicha circunstancia sólo se sostiene en la afirmación del propio acusado. Lo cierto es que se trató de un acusado en un vehículo que había sido objeto de un robo con intimidación dos días antes y que un misterioso amigo le pide que se lo cuide, pese a que el acusado ni siquiera tiene licencia de conducir. **¿Es creíble, atendidas las circunstancias descritas, que el acusado no haya podido menos que representarse con un elevadísimo grado de probabilidad**

que el vehículo que tenía en su poder provenía de la perpetración de un delito? La sola pregunta no resiste análisis y, desde luego, la explicación del acusado habría exigido una mínima carga argumentativa y actividad probatoria, que no han sido verificadas en juicio. Todos los antecedentes resumidos proporcionan un contexto fáctico a partir del cual no cabe sino inferir que el acusado en cuestión no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo que el mismo condujo, es decir, obró con dolo eventual.

Para ir cerrando la valoración de la prueba de cargo, a propósito de lo precedentemente dicho en este motivo, la corroboración de las premisas fácticas de una hipótesis acusatoria supone que la prueba de cargo este desprovista de ripios, inconsistencias, vacíos, contradicciones relevantes que, (de no mediar explicaciones convincentes), afecten la coherencia y competencia epistémica del conjunto de las evidencias destinadas a acreditar más allá de toda duda razonable los hechos que configuran la acción penalmente relevante contenida en la acusación; exigencias ineludibles para que una sentencia condenatoria pueda satisfacer los requisitos de la regla del artículo 342 del Código Procesal Penal. Ello demanda que la corroboración más allá de toda duda razonable, entendida como suficiencia probatoria en el caso de una imputación criminal, ***deba exceder la simple valla de una sospecha, incluso, una de carácter vehemente, cuestión que se ha logrado por parte del Ministerio Público en este caso.***

OCTAVO: Hecho acreditado y participación.

Que, conforme al mérito de la prueba valorada y los argumentos expuestos, el tribunal ha podido tener por acreditado los siguientes hechos o premisas fácticas:

1.- Que el día 19 de abril de 2022, a las 9:10 horas aproximadamente en la vía pública, intersección de las calles Mailef con Quenuir en la comuna Estación Central, el imputado GABRIEL ARMANDO LEÓN MUÑOZ fue sorprendido por funcionarios de Carabineros manteniendo en su poder el vehículo PPU BYHS-50.

2.- Que dicho vehículo mantenía encargo vigente por Robo de fecha 17 de abril de 2022, encargo SEBV. 202204-4951, según parte de denuncia n° 2140 de fecha 17 de abril de 2022 de la 21ª Comisaría de Estación Central; no pudiendo el acusado menos que conocer la circunstancia acerca del origen ilícito del automóvil que tenía en su poder.

4.- Que dicho encargo por robo estaba asociado a una denuncia por el delito de robo con intimidación perpetrado contra Marcela Verónica Salas Banca, el 17 de abril de 2022.

Que, según lo ya latamente razonado en los motivos precedentes, tales hechos son constitutivos del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, correspondiendo - conforme a la prueba aludida y analizada en el motivo séptimo- participación en calidad de autor material directo al acusado **GABRIEL ARMANDO LEON MUÑOZ**, conforme al artículo 15 número 1 del cuerpo legal aludido.

NOVENO: Estándar probatorio a la luz de la decisión condenatoria.

El estándar probatorio opera sobre la base de decidir fundadamente si, considerando la prueba y los elementos de

juicio incorporados en el proceso penal, es posible o no justificar externamente la concurrencia de la hipótesis acusatoria o si, por el contrario, dichos datos probatorios resultan insuficientes para satisfacer el estándar establecido por el legislador en el artículo 340 del Código Procesal penal.

Dicha suficiencia probatoria, para probar la culpabilidad, debe satisfacer -siguiendo a Jordi Ferrer- dos condiciones conjuntamente: **"1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc"**. (Ferrer Beltrán, Jordi, La Valoración Racional de la Prueba, Editorial Marcial Pons, pág. 147).

Por las razones expuestas y habiendo valorado la prueba incorporada al juicio de conformidad lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal estos sentenciadores han podido arribar a la conclusión de que se ha cumplido la exigencia del artículo 340 del citado cuerpo legal en orden a que la decisión de condena satisface el umbral de una convicción, más allá de toda duda razonable, de que al acusado León Muñoz le ha cabido participación directa en los hechos penalmente relevantes contenidos en la acusación estatal.

DÉCIMO: Determinación de las pena y forma de cumplimiento.

Que, una vez verificada la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, el tribunal ha tenido las

siguientes consideraciones para adoptar las penas que se imponen en esta sentencia:

- 1) Como primera cuestión ha sido relevante tener a la vista el extracto de filiación del acusado, en el cual registra una condena de 29 de diciembre de 2021, a la pena de 3 años y 1 día, por el delito de robo con intimidación, en causa RIT 3909-2021, de Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.
- 2) Lo anterior supone, desde ya, descartar para el cumplimiento de la pena que se impondrá, el otorgamiento de algunas de las penas sustitutivas de la ley 18216, por lo que el cumplimiento de la pena será efectivo.
- 3) En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, efectivamente concurre respecto del acusado la del artículo 11, número 9, del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. En efecto, de la simple lectura de los fundamentos de esta sentencia es posible inferir que el acusado, con su declaración en el juicio, proporcionó antecedentes de contexto que resultaron relevantes para la decisión de condena. Reconoce todos y cada uno de los elementos objetivos del delito, contribuyendo con ello a reducir el ámbito de la controversia a su mínima expresión. Por otro lado, al no concurrir agravantes, el tribunal impondrá la pena en el umbral más bajo, dentro del marco rígido contemplado para este delito conforme lo dispone el artículo 449 del Código Penal, al tenor de la conminación legal abstracta del

artículo del artículo 456 bis A, inciso tercero, del referido cuerpo legal.

- 4) No habiéndose opuesto el fiscal, la pena accesoria de multa será rebajada conforme al artículo 70 del Código Penal, teniendo en especial consideración que el acusado, debido al tiempo que lleva privado de libertad y el que deberá purgar, no estará en condiciones de generar ingresos.
- 5) Finalmente, se dispensará al acusado del pago de las costas, ya que al haber comparecido representado por la defensa penal pública. Es posible presumir su pobreza.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 11 N° 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 25, 26, 29, 49, 50, 70. 432, 436 inciso primero, 449 y 456 bis A del Código Penal; artículos 1, 14, 15, 15 bis, 16 y 17 de la ley 18.216; y, artículos 4, 47, 295, 296, 297, 324, 340, 341, 342 y 344 del Código Procesal Penal se declara:

- I. Que se condena a **GABRIEL ARMANDO LEON GONZALEZ**, ya individualizado. a la pena de tres años y un día (3 años y 1 día) de presidio menor en su grado máximo y multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, como **AUTOR** del delito de **RECEPTACION DE VEHICULO MOTORIZADO**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, perpetrado 18 de abril de 2022, en la comuna de Estación Central, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

- II.** Que, no reuniéndose respecto del sentenciado los requisitos de la Ley N°18.216, éste deberá cumplir efectivamente la pena impuesta en un establecimiento penal.
- III.** Para todos los efectos legales, se entenderá que la pena impuesta en esta sentencia se ha comenzado a cumplir el 19 de abril de 2022, fecha desde la cual ha estado ininterrumpidamente privado de libertad (646 días a la fecha de esta sentencia).
- IV.** Que la pena de multa podrá pagarse en cinco parcialidades mensuales de una unidad tributaria mensual, debiendo enterarse la respectiva cuota en arcas de la Tesorería General de la República. Ello, sin perjuicio de lo prevenido en el inciso final del artículo 49 del Código Penal, conforme al cual queda exento de cualquier apremio el condenado a reclusión menor en su grado máximo o a otra pena más grave que deba cumplir efectivamente.
- V.** Que se exime al sentenciado del pago de las costas.

Ejecutoriado que sea el presente fallo y, en su oportunidad, remítase copia autorizada al Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda.

Regístrese.

Redactó la sentencia el juez don ***Eduardo Gallardo Frías.***

RUC: 2200376389-0

RIT: 506-2023

Código delito ()

**SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA SALA DEL CUARTO TRIBUNAL DE
JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LOS JUECES
CLAUDIA GALAN VILLEGAS, FRANCISCO JAVIER VELA GONZÁLEZ Y
EDUARDO GALLARDO FRIAS, TODOS SUBROGANTES.**